

que decían poseer: y como fundamentos legales de su pretensión, citaron los demandantes los artículos 348 y 609 del Código civil, los 1502, 1503, 1504, 1556, 1652 y 1654 de la Ley de Enjuiciamiento civil, el 172 del Reglamento para la ejecución de la Ley hipotecaria, y el 63 de la Orden General No. 118 de quince de Agosto del año próximo pasado, sin que a la demanda se acompañara documento alguno.

Resultando que Don Ramón Amador y Doña Josefa Ramona Gonzalez y Maldonado contestaron a la demanda, alegando que tenían el dominio proindiviso de las ciento trece cuerdas de terreno a que se referían los demandantes y que venían poseyendo con justo título y buena fé, desde veinte y ocho de Diciembre de mil ochocientos setenta y ocho, en que falleció su padre Don Manuel Gonzalez, las cuales por ningún concepto han podido ni pueden formar parte de la agrupación de fincas cuyo dominio se reclama; que en ninguna época habían gravado, cedido ni traspasado la referidas ciento trece cuerdas que son hoy objeto del litigio; que tienen en esos terrenos el dominio pleno proindiviso a título de herencia de sus padres; que Ledesma Artau y Compañía, Don Fabian Franco y Don Peregrino Villamil no han tenido ni tienen justo título en esas ciento trece cuerdas de terreno, deslindadas y descritas en la certificación de inscripción expedida por el Registrador de la Propiedad de Arecibo, y por consiguiente no han podido sufrir daños y perjuicios bajo concepto alguno; y citando como fundamentos de derechos los artículos 349, 350, 392, 657, 661, 1026, 1051, 1052 y 1068 del Código civil, los 2º y 389 de la Ley Hipotecaria, la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de España de 16 de Marzo de 1860, y la Ley 8ª título 22 de la partida 3ª, terminaron suplicando se les absolviera de la demanda con imposición de costas a los demandantes, condenando además a Ledesma Artau y Compañía a que les pagaren en concepto de indemnización de daños y perjuicios la cantidad de siete mil quinientos veinte y cinco pesos, a cuyo fin formularon reconvencción, en la que expusieron los hechos y fundamentos de derecho que para sostenerla estimaron convenientes, cuya reconvencción impugnaron los demandantes pidiendo se declarara sin lugar.

Resultando que suministradas pruebas por ambas partes, figurando entre las de la parte actora, además de la documental, testifical y de confesión, el plano de la finca objeto de la súplica de la demanda, levantado por perito agrimensor, con la información del mismo, y en la documental una certificación librada por el Registrador de la Propiedad de Arecibo, expresiva de las inscripciones hechas en su oficio con relación a los diversos terrenos a que en los hechos de la demanda se alude, hasta llegar a la inscripción de la adjudicación en pago de los que son materia del juicio, sin que hayan venido a éste los títulos inscritos; figurando en la prueba de los demandados, además de la testifical y de confesión, como parte de la documental una escritura pública de veinte y cuatro de Enero de mil ochocientos cincuenta y nueve, inscrita en el Registro de la Propiedad de Arecibo en 9 de Octubre de 1880, por la que Don Manuel de Jesús Colón vendió a Don Manuel Gonzalez ciento trece cuerdas de terreno radicadas en el barrio de Limón y Don Alonso, sitio de las Cuevas, cuyos límites se consignan en los siguientes términos: "de una Moca que está en la hoya de una quebrada lindando con Don Francisco Viruet y el comprador, de aquí línea recta hasta el sitio del Pilón de la misma quebrada, de aquí lindando con Juan Manuel Rodriguez, a un roble, y con el mismo lindero, a una guava que está en la hoya del Caliche, y siguiendo hoya arriba lindando con Don Juan Francisco Viruet hasta el remate de la hoya, y de aquí línea recta a la Moca donde se empezó."

Resultando que el Tribunal del Distrito de Arecibo dictó sentencia en siete de Marzo último, por la que declaró sin lugar la demanda reivindicatoria y la reconvencción, absolviendo de aquella a Don Ramón Amador y a Doña Josefa Ramona Gonzalez y Maldonado, y de ésta a Ledesma Artau y Compañía, con una cuarta parte de costas a cargo de los demandados Gonzalez y Maldonado, y las tres cuartas partes restantes a cargo de la referida sociedad, de Don Fabian Franco Vicente y Don Peregrino Villamil Torrado.

Resultando que contra esa sentencia impusieron Ledesma Artau y Compañía, Don Fabian Franco y Don Peregrino Villamil recurso de casación por infracción de Ley, autorizado por los números 1º y 7º del artículo 1690 de la Ley de Enjuiciamiento civil, alegando los siguientes motivos. — Primero: Error de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas, con infracción de los artículos 1216 y 1218 del Código civil, puesto que se declara en la sentencia que la finca descrita en la escritura pública de 24 de Enero de 1859 y traída a los autos por los demandados para acreditar su dominio, está comprendida en el plano presentado por el perito agrimensor con solo unir los puntos conocidos con los nombres de Moca y Pilón, cuando éste afirma categóricamente que solo pudo hallar en el terreno, nada más que por indicaciones de Don Agustín Viruet, apoderado de los demandados, los puntos designados en dicha escritura con los nombres de Moca, remate de la hoya, sitio del caliche y pilón, sin que pudiera cerrar la figura geométrica, porque para ello hubiera tenido que tirar una línea recta desde el punto denominado Moca al llamado Pilón, y si bien en la escritura mencionada se afirma que de uno a otro punto hay una línea recta, se agrega que

ambos están en la misma quebrada, y no lo están los indicados por dicho Viruet. — Segundo: Igual error de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas, con infracción de los artículos ya citados del Código civil, por cuanto no siendo posible tirar la línea recta que una los puntos denominados Moca y Pilón, y trazando tan solo la que comprende los puntos denominados Moca, sitio del Caliche y Pilón, determinados por el único informe interesado de Viruet, no es posible cerrar la figura geométrica, y queda por tanto sin determinarse la finca cuya propiedad alegan los demandados, no habiendo podido en su consecuencia el Tribunal sentenciador declarar que no se ha comprobado la existencia de esa finca, porque según dice el Agrimensor en su informe, sin ser relarguidas y si aceptadas por la parte contraria sus afirmaciones, ninguna de los dueños de los terrenos limitrofes confirmó lo dicho por Viruet de que donde se señalan en el plano los puntos indicados con los nombres de Moca, Remate de la Hoya, Caliche y Pilón están los indicados con esos nombres en la escritura de referencias, porque la afirmación de Viruet no debe tenerse en consideración, ya que es apoderado de los demandados, porque no siendo posible unir por medio de una línea los puntos Moca y Pilón, sería preciso para cerrar la figura geométrica unir, como afirma el Agrimensor, sin que lo autorice la referida escritura, el punto denominado Moca con otro punto y éste con el Pilón, quedando entonces terminada la figura con la colindancia Este de la finca El Monte, y los Sres Gonzalez ocupando una extensión de doscientas diez cuerdas, porque el Agrimensor con razones irrefutables y perfectamente comprobadas no admite que esa porción de terreno sea la que se describe en la repetida escritura, y porque según certificación expedida por el Alcalde de Utuado, Doña Josefa Ramona Gonzalez y Don Ramón Amador del mismo apellido no pagan contribución por ninguna finca de aquella cabida, satisfaciéndola solamente la primera desde el diez y siete de Abril de mil ochocientos noventa y nueve por una finca de setenta y ocho cuerdas. — Tercero: Error de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas, al no reconocer como probado la Sala sentenciadora que el perímetro que se encierra en el plano formado por el Agrimensor dentro de las líneas en él marcadas, es exactamente el de la finca primero hipotecada y después adjudicada a los demandados y de la que ineludiblemente está ocupando parte los demandados, infringiendo así en cuanto al error de derecho, además de los artículos ya citados, los 1243 y 1248 del Código civil, en relación el primero con el 631 de la Ley de Enjuiciamiento civil, toda vez que de la certificación de inscripción de dicha finca en el Registro de la Propiedad de Arecibo, perfectamente conteste con el informe del Agrimensor y con las declaraciones de los testigos presentados sobre todo el anciano Don Luis Barrio Guzmán, que fué dueño de la finca adjudicada y es pariente de Agustín Viruet, apoderado de los demandados, claramente se deduce aquella prueba. — Cuarto: Igual error de hecho y de derecho por no haber reconocido la Sala sentenciadora como probado que de la finca de quinientas cuerdas, veinte y cinco céntimos, adjudicada a los demandantes, tienen éstos cuando menos inscrito a su favor el dominio perfecto de trescientas cuarenta cuerdas desde el diez y siete de Marzo de mil ochocientos ochenta y la posesión con buena fé y justo título de las ciento diez cuerdas restantes desde el once de Junio de mil ochocientos ochenta y siete, como así lo comprueba la certificación del Registrador de la Propiedad de Arecibo, según la cual los demandantes poseen con buena fé en concepto de dueños públicos y pacíficos hasta el catorce de Abril de mil ochocientos noventa y ocho, en que según la certificación del Tribunal del Distrito de San Juan dedujeron el interdicto los demandados, la finca de quinientas cuerdas veinte y cinco céntimos, cuya finca fué formada por segregación de otra de seiscientos treinta cuerdas, veinte y cinco céntimos, que a su vez se formó con ciento diez cuerdas, de las que los primeros poseedores solo inscribieron la posesión en once de Junio de mil ochocientos ochenta y siete, y con quinientos veinte cuerdas veinte y cinco céntimos, segregada también de otra de mayor cabida, cuyo dominio figura inscrito a nombre de sus primitivos dueños desde el diez y siete de Marzo de mil ochocientos ochenta, habiendo infringido el Tribunal sentenciador, al incurrir en el error de derecho apuntado, los artículos 1216 y 1218 del Código civil. — Quinto: Infracción de los artículos 348, 609, 1445, 1462, 1473, 1930, 1940, 1941, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954 y 1957 del Código civil, modificados el último por la Orden judicial de cuatro de Abril de mil ochocientos noventa y nueve, de los 17, 25, párrafo 3º del 34, y párrafo 1º del 35 de la Ley Hipotecaria, y del 172 del Reglamento para su aplicación, por cuanto teniendo admitirse como probado que de la finca adjudicada está inscrito a favor de los demandantes el dominio de trescientas cuarenta cuerdas desde el diez y siete de Marzo de mil ochocientos ochenta, y la posesión con buena fé y justo título de las ciento diez cuerdas restantes desde el catorce de Abril de mil ochocientos ochenta, debió declararse con lugar la acción reivindicatoria ejercitada contra los demandados, porque en cuanto a las ciento diez cuerdas de que solo tienen inscrita la posesión, han adquirido aquellos su dominio por prescripción, y en su consecuencia tienen hoy el de toda la finca de un modo pleno y absoluto; porque los

demandados no han comprobado que la parte que detentan de la finca, sea por su idéntica extensión ó igualdad de colindancias y por su situación topográfica, la que dicen haber adquirido por herencia de su padre, que a su vez la hubo por escritura pública de veinte y cuatro de Enero de mil ochocientos cincuenta y nueve, y por que aun habiéndose justificado ese importantísimo extremo, siempre resultaría que la titulación de los demandantes, en cuanto al dominio de las trescientas cuarenta cuerdas fué inscrita con anterioridad al título de los demandados, y los efectos de ese título que la rigen anulados por la prescripción en cuanto a las ciento diez cuerdas restantes. — Sexto: Infracción del principio "actore non probante, reus est absolvendus", que es aplicable a contrario sensu al demandado, cuyas excepciones, si no han sido justificadas, deben desestimarse; doctrina sentada por el Tribunal Supremo de Justicia de España en sentencias de 21 de Enero de 1867, 21 de Diciembre de 1882 y 12 de Diciembre de 1887, y que ha infringido notoriamente la Sala sentenciadora al reconocer a los demandados el dominio de la porción de terreno que ocupan en la finca de que se trata, sin haber probado en forma alguna la identidad de esa porción de terreno con la indicada en la escritura de veinte y cuatro de Enero de mil ochocientos cincuenta y nueve.

Visto, siendo Ponente el Juez Asociado Don José O. Hernandez.

Considerando que la acción reivindicatoria del dominio de una cosa solo puede prosperar cuando se ejercita contra el tenedor ó poseedor de ella, y cuando se acredita cumplidamente dicho dominio, sin que sea lícito pretender suplicar esa prueba ó lo que de ella falte por medio de objeciones dirigidas a las del demandado, quien no necesita oponer a la demanda más que la simple tenencia, sin que se le pueda obligar a exhibir el título con que posea, como así lo establecen los artículos 348 y 448 del Código Civil, y lo confirma la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia de España, anterior a la extinción de su soberanía en esta Isla.

Considerando que aún en la hipótesis de que el Tribunal del Distrito de Arecibo hubier incurrido, al apreciar las pruebas de la parte demandada en los errores de hecho y de derecho que se apuntan en los motivos 1º y 2º del recurso, tales errores, no son de influencia en la parte dispositiva del fallo, cuya razón fundamental es la de que el actor no ha justificado ser dueño de la cosa litigiosa, pudiendo ser todos los demás razonamientos con que se pretende robustecer la sentencia absolutoria más ó menos ainentes, pero innecesarios, como sucede con los que son materia de impugnación en los expresados motivos, por referirse a pruebas que la parte demandada no estaba obligada a suministrar, sino la demandante en virtud de la doctrina legal ya expuesta.

Considerando que tampoco son de influencia en la parte dispositiva del fallo los errores de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas atribuidos a la Sala sentenciadora en el tercer motivo del recurso, pues aunque la finca objeto de la reivindicación fuera la misma que ha marcado el perito agrimensor en el plano que de ella levantó, la sentencia se sostendría mientras existiera el fundamento esencial y necesario de ella, consistente en no haberse justificado por la parte actora el dominio reclamado.

Considerando que al conseguir la Sala en uno de sus fundamentos de derecho que en mérito de la titulación con que se subastó la finca de que se trata y se adjudicó a los demandantes, no cabe duda de que estos solo adquirieron los derechos que de esa titulación se derivan, ó sea la posesión en parte, y en parte la propiedad y dominio pleno del inmueble adjudicado, ha reconocido la eficacia legal de la certificación de inscripción expedida por el Registrador de la Propiedad de Arecibo, pues no otra cosa se desprende de ella; y por tanto, no ha incurrido en los errores de hecho y de derecho que se alegan en el 4º motivo del recurso.

Considerando en cuanto a las infracciones legales expuestas en el 5º motivo del recurso, que además de omitirse la expresión del concepto en que se ha cometido cada una de ellas, según exige el artículo 1718 de la Ley de Enjuiciamiento civil, es un hecho probado que los demandados no poseen toda la finca objeto de la demanda, por lo que no ha debido ejercitarse contra éstos la acción reivindicatoria en la forma en que se ha hecho, sino únicamente para recuperar la parte que realmente poseen; y que respecto de esa parte poseída, no pudiendo precisarse, por no haberse practicado desde alguno, si está comprendida en los terrenos de que los demandantes tienen título de dominio ó en los otros cuya posesión se ha inscrito en el Registro, es imposible afirmar que de dicha parte de terreno se haya comprobado el dominio por parte de los demandantes, como tampoco cabe sostener que lo han adquirido por prescripción, pues no habiendo sido alegada en la demanda como medio de adquirirlo, no puede ser materia de discusión en el pleito ni en el recurso; pero aún en el supuesto de que tal discusión fuera legal, nunca conduciría al fin que se propone la parte recurrente, por falta de identificación de los terrenos a que se refiere la información posesoria inscrita en el Registro con los que posee la parte demandada, y ser en su consecuencia imposible definir si se han llenado ó no todos los requisitos de la prescripción, por todo lo cual no han sido infringidas las disposiciones legales que se invocan.

Considerando que lejos de infringir el Tribunal sentenciador el principio actore non probante, reus